Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTAS** las constancias para resolver el Recurso de Revisión **00253/INFOEM/IP/RR/2024**, presentado por **una persona que no registró nombre alguno,** en lo sucesivo se denominará como **EL RECURRENTE**, en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información con número de folio **00007/TECAMAC/IP/2024**, por parte del **Ayuntamiento de Tecámac,** en adelante el **SUJETO OBLIGADO,** se emite la presente resolución con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El día **once de enero de dos mil veinticuatro**,se presentó ante el Sujeto Obligado vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en adelante (SAIMEX), la siguiente solicitud de información pública:

*“Solicitó información de la oficial de policía Judith Jaqueline Espindola Paredes, que actualmente labora como servidor público en el área de la Policía Municipal Preventiva, lo siguiente: 1. Se solicita saber si aprobó el examen de control y confianza requeridos por esta Institución, el cual contribuye para verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional. 2. Requiero saber si tiene algún proceso interno por posibles hechos configurativos de un delito. 3. Se solicita saber si los días 6 y 7 de junio de 2023, se encontraba en funciones y si es así, en qué sector se encontraba o si presto auxilio en el sector de Tecámac centro. 4. Se solicita saber si el día 24 de agosto de 2023, se encontraba en funciones y si es así, en qué sector se encontraba o si presto auxilio en el sector de Tecámac centro.”*

* Se eligió como modalidad de entrega de la información: A través del **SAIMEX.**

1. El **veintidós de enero de dos mil veinticuatro**, el Sujeto Obligado**,** dio respuesta a través de nueve archivos electrónicos a saber:

* **SOLICITUD 00007.pdf,** cuyo contenido corresponde a un oficio signado por la Comisionada de la Guardia Civil de Tecámac en el que de manera general informa que respecto del numeral 1 de lo solicitado, corresponde a una atribución del Centro de Control y Confianza del Estado de México, por lo que la Guardia Civil de Tecámac se encuentra imposibilitada de proporcionar lo solicitado. Por otro lado informa que relativo a los numerales 2, 3 y 4de la solicitud, corresponden a rubros que no pueden difundirse, por lo que corresponde a información clasificada como reservada.

1. El **veintiséis de enero dos mil veinticuatro**, el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta, realizando las siguientes manifestaciones:

* **ACTO IMPUGNADO:** *“La respuesta del sujeto obligado al Número de Folio de la Solicitud: 00007/TECAMAC/IP/2024.”*
* **RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD:** *“Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México a 26 de enero de 2024. Número de Folio de la Solicitud: 00007/TECAMAC/IP/2024 Recurso de Revisión En base a lo solicitado y la respuesta del sujeto obligado, se interpone el siguiente Recurso de Revisión con fundamento en el artículo 178, 179 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: De la solicitud realizada con Folio de la solicitud 00007/TECAMAC/IP/2024 se solicitó lo siguiente: “Solicitó información de la oficial de policía Judith Jaqueline Espindola Paredes, que actualmente labora como servidor público en el área de la Policía Municipal Preventiva, lo siguiente: 1. Se solicita saber si aprobó el examen de control y confianza requeridos por esta Institución, el cual contribuye para verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional. 2. Requiero saber si tiene algún proceso interno por posibles hechos configurativos de un delito. 3. Se solicita saber si los días 6 y 7 de junio de 2023, se encontraba en funciones y si es así, en qué sector se encontraba o si presto auxilio en el sector de Tecámac centro. 4. Se solicita saber si el día 24 de agosto de 2023, se encontraba en funciones y si es así, en qué sector se encontraba o si presto auxilio en el sector de Tecámac centro.” En respuesta a lo anterior me contestaron textualmente lo siguiente: “Tecámac, México a 22 de Enero de 2024 Nombre del solicitante: C. Solicitante Folio de la solicitud: 00007/TECAMAC/IP/2024 .........................………………………………………………………………………………………………. En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que: Respecto de la respuesta de la presente solicitud, hago de su conocimiento que los resultados de los examenes de control y confianza de la C. JAQUELINE ESPÍNDOLA PAREDES, es unicamente una atribución del Centro de Control y Confianza del Estado de México, toda vez que la Guardia Civil esta imposibilitada para cumplir esa petición, adicional es pertinente mencionar que las peticiones sobre si la elemento antes mencionada cuenta con un proceso interno, en que sector se encontraba los días 6 y 7 de junio del 2023 y de igual manera informar en que sector se encontraba el día 24 de agosto del 2023, esta información es considerada como reservada o confidencial de acuerdo a las disposiciones aplicables. ATENTAMENTE C. CARLOS ALONSO HERNÁNDEZ PELÁEZ”. Y en su archivo adjunto, señala textualmente lo siguiente: “SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 00007/TECAMAC/IP/2024 OFICIO: UTAIP/OI/00050/2024 FECHA: 11 DE ENERO DEL 2024 ASUNTO: SE REMITE RESPUESTA A SOLICITUD …………………………….…………………………………………………………………… Con relación a la solicitud ingresada en la Guardia Civil de Tecámac, sobre los datos que requieren de la C. Jaqueline Espíndola Paredes en los puntos 2, 3 y 4 de la represente solicitud es importante mencionar que los sujetos obligados son responsables de todos los datos personales en sum posesión de los elementos adscritos a la Guardia Civil de Tecámac, no se pueden difundir distribuir o comercializar los datos personales o laborales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autentificación similar, de los elementos a los que se haga referencia la información de acuerdo a la normativa aplicable, lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por la ley de la materia, en los casos de interés público. Toda información de Seguridad Pública generada es poder de instituciones de Seguridad Pública, o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, tratarse y clasificarse como reservada de acuerdo a las disposiciones aplicables, la información relativa a los servidores públicos integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida o integridad física con motivos de sus funciones. ......................................................................................................................." Ahora bien, de lo anterior se desprende la falta, deficiencia e insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, ya que de manera vaga y tajante señala que se encuentra imposibilitada para cumplir dicha petición, de lo anterior claramente se desprende que no sé encuentran fundamentos jurídicos donde motive su acción y por lo tanto me deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica por desconocer en qué fundamentos legales motivo su actuación. La violación incurrida viola mis derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, derechos que exijo se cumplan y ello porque, estos derechos son aplicables para que el Estado me garantice que se me permita el acceso a la información y yo pueda exigir que se me proporcione lo que solicito y además que se me respeten mis derechos fundamentales de acceso a la información y de petición. Ya que el sujeto pasivo u obligado por tal derecho es el Estado, que está constreñido a garantizar que se permita o proporcione dicha información, sin más limitante que la propia Constitución y las que se establezcan en las leyes. Asimismo al no proporcionar información de si tiene algún procedimiento interno por posibles hechos configurativos de un delito en su contra, si se encontraba en funciones los días 6, 7 de junio y el 24 de agosto de 2023, y en qué sector se encontraba o si presto auxilio en el sector de Tecámac centro, en su contestación de manera textual señala lo siguiente “esta información es considerada como reservada o confidencial de acuerdo a las disposiciones aplicables”, pero esta respuesta no satisface la garantía de la debida fundamentación y motivación, por lo que hace a las facultades y competencia del emisor del acto, es necesario que en el documento que se contenga, se invoquen con precisión y sin ambigüedades las disposiciones legales, acuerdo o decreto incluyendo el apartado, la fracción o fracciones, incisos, subincisos en que apoya su actuación, causando incertidumbre e inseguridad jurídica la respuesta de esta institución, al estar en presencia de posibles hechos constitutivos de delito del servidor público en cuestión (por posibles actos entre otros de corrupción, robo, encubrimiento de hechos delictivos, derivados del presunto culpable XXXXXXXXX y otros) y al no proporcionar lo solicitado nos causa incertidumbre el proceder de esta institución. Pido la suplencia de la deficiencia de la queja, así mismo pido que se me dé derecho a conocer esa información, y que limitar ese derecho por una cuestión técnica, violaría mi derecho al acceso a la información, esto con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en función del “derecho al acceso a la información”, ya que establece entre otras cosas que “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos” y con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que “El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios”, por lo que toda dependencia u organismo está obligada a poner la información en los medios más óptimos para la consulta de la ciudadanía de esta información. En conclusión, la respuesta de la solicitud es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, por una falta de fundamentación y motivación legal, ya que todo acto debe satisfacer los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello se solicita encarecidamente que en términos de los artículos 1, primer, segundo y tercer párrafos, 8, 35 fracción V y 133 de la Ley Fundamental, 1.1., 8.1. y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 5.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es parte, me respeten mis derechos humanos como lo son, legalidad, certeza, seguridad jurídica, claridad, precisión, congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación legal, pro homine y por accione, indubio pro reo pacta sun servanta y mis derechos humanos señalados en el artículo 16 de nuestra Constitución.”*

1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, se acordó a las partes a efecto de que en un plazo máximo de siete días, el Recurrente manifiesta lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y alegatos, y el Sujeto Obligado presentará el Informe Justificado.
2. El Recurrentedejó de realizar manifestaciones que a su derecho conviniera y asistiera. Por su parte, el Sujeto Obligado,fue omiso en rendir su informe justificado,
3. En fecha diecinueve de marzo del año en curso, se amplió el término para resolver el Recurso de Revisión por un periodo de quince días hábiles adicionales al lapso ordinario en términos del artículo 133 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
4. Este Organismo Garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
5. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir la resolución se encuentra justificado en los elementos para medir la razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
6. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
7. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
8. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas; o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.*

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.*

1. Por ello, este Organismo Garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. Seguidamente, en fecha catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y, ordenó la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

## **PRIMERA. Competencia**

1. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 37 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDA. Procedencia.**

1. Este Órgano Garante considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; asimismo no se tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia.
2. Por otro lado, es de suma importancia señalar que la parte recurrente no proporciona un nombre o datos de identificación como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante lo anterior, no proporcionar el nombre completo no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo* ***serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

1. Robusteciendo lo anterior se encuentra lo dispuesto en el artículo 6, Apartado A, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:

*"****Artículo 6.-*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.”*

1. Así como el artículo 5 fracción III, párrafo vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que determina lo siguiente:

*"****Artículo 5.-*** *En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece”.*

*…*

*Toda persona en el Estado de México, tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*...*

*El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos;*

*...*

*VIII. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.”* (Sic)

1. Por otra parte, del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se destaca lo siguiente:

*"****Artículo 1****. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."*

1. Esto es, que el derecho humano de acceso a la información pública, se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su interposición, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho *derecho fundamental exime a quien lo ejerce*, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que, incluso, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.
2. En consecuencia, dado lo expuesto y fundado con anterioridad, se estima que el requisito relativo al nombre del **RECURRENTE** no constituye un presupuesto indispensable de procedencia del Recurso de Revisión, en términos de los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, párrafos segundo y tercero, 6 apartado A fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 párrafo vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debido a que el acceso a la información pública es un derecho humano que no requiere legitimación en la causa, si no que únicamente basta con que se encuentre legitimado en el procedimiento de Recurso de Revisión, circunstancia que se acredita en las constancias electrónicas de los expedientes en revisión, de las que se desprende que la parte recurrente, es la misma que realizó la solicitud de acceso a la información pública que ahora se impugna.
3. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.
4. Finalmente, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la citada Ley de la materia, por lo que es procedente que este Instituto conozca y resuelva el presente Recurso de Revisión.

# **TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.**

1. Se solicitó tener acceso, a la información que a continuación se simplifica:

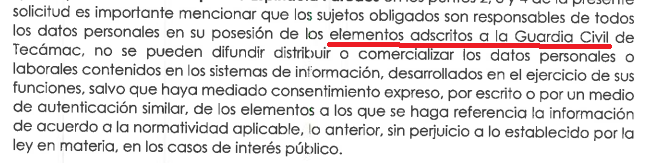
**De la oficial de policía señalada en la solicitud, adscrita al área de la Policía Municipal Preventiva, lo siguiente:**

* **Conocer si aprobó el examen de control y confianza;**
* **Conocer si cuenta con algún proceso interno por posibles hechos configurativos de un delito;**
* **Conocer si los días 6 y 7 de junio y 24 de agosto de 2023, se encontraba en funciones y de ser así, en qué sector se encontraba o si prestó auxilio en el sector de Tecámac Centro.**

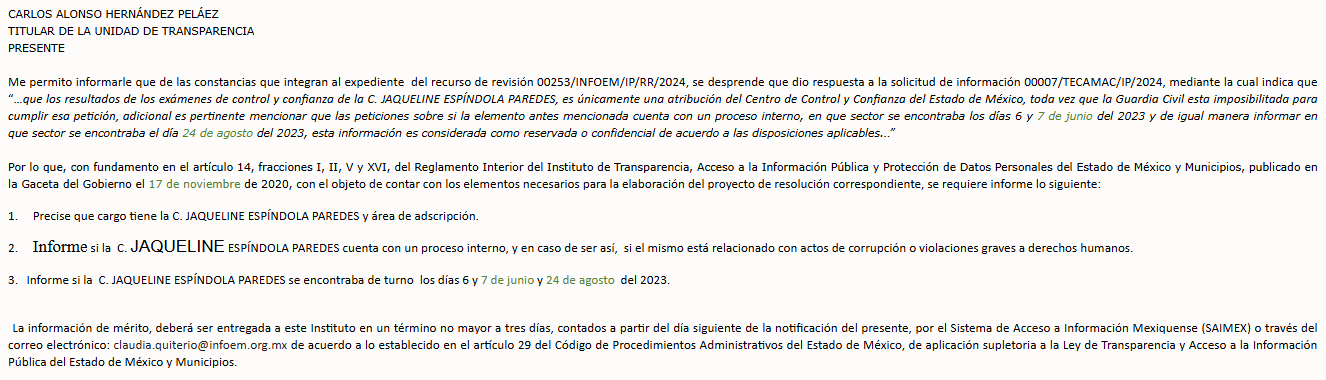
1. En respuesta, el Sujeto Obligadoremitió el oficio ya descrito en el párrafo 2. Inconforme con la respuesta, se interpuso recurso de revisión argumentando de manera general la negativa a la entrega de la información.
2. En dichas condiciones, la controversia a resolver en el presente proveído, corresponde a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, fracción Ide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado deMéxicoyMunicipios; fracción que determina la hipótesis relativa a la negativa de la información solicitada. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocará en determinar si el Sujeto Obligado con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaseñalada.

## **CUARTA. Del estudio y resolución.**

1. Determinado lo anterior; revisaremos la atención otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud que dio origen a este recurso, considerando imprescindible establecer lo que la regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de Transparencia local, en su artículo 12, el cual establece que quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma, del mismo modo, el artículo 18 establece que los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.
2. Asimismo, es relevante mencionar que el artículo 19 del ordenamiento local de la materia señala que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.
3. Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar información que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque estos las generaron o la poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este lo hace en representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier medio de difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información, siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley.
4. Acotado lo anterior, es dable primeramente recordar lo solicitado y, que versó en información perteneciente por quien a decir del particular, es una servidora pública adscrita al área de la Policía Municipal Preventiva. Contexto que ciertamente acepta el **SUJETO OBLIGADO** en su respuesta cuando menciona lo siguiente:



1. No obstante, si bien es cierto el particular asevera que se trata de una servidora pública policía, este Órgano Garante no cuenta con certeza plena de que tenga el carácter de operativo. Motivo por el cual esta Ponencia Resolutora realizó un requerimiento al **SUJETO OBLIGADO** vía correo electrónico, a efecto de que se pronunciara respecto de lo siguiente para mejor proveer:



1. Sin embargo, el **SUJETO OBLIGADO** fue omiso en emitir una respuesta a este Organismo Garante, por lo tanto, prevalece la falta de certeza con relación al cargo con que cuenta la servidora pública de referencia.
2. Luego entonces, es necesario realizar las siguientes precisiones. Que el criterio actual del Pleno de este Instituto es clasificar como reservado información del personal operativo de seguridad pública, con fundamento en el artículo 140, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, (homólogo del artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública), que prevé lo siguiente:

*“****Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

*…”*

1. De dicho precepto normativo se desprende que podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Por su parte, los Lineamientos Generales, disponen:

**“*Décimo octavo.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.*

*Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.*

*Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.”*

1. Así, es posible observar que podrá clasificarse como información reservada, aquélla que comprometa la seguridad pública o bien, entorpezca los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos o la capacidad de las autoridades para disuadir o prevenir disturbios sociales.
2. De la misma manera, será información clasificada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.
3. En ese orden de ideas, el artículo 81 de la Ley de Seguridad del Estado de México, que establece lo siguiente:

***“Artículo 81.-*** *Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada en los casos siguientes:*

***I.*** *Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la seguridad pública o el combate a la delincuencia en el Estado de México;*

***II.*** *Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o a las instituciones del Estado de México;*

*…*

***IV.*** *La que sea producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución Federal y las disposiciones legales correspondientes; y*

***V.*** *La contenida en averiguaciones previas, carpetas de investigación, expedientes y demás archivos relativos a la investigación para la prevención y la investigación de los delitos y faltas administrativas, en términos de las disposiciones aplicables.”*

1. De lo anterior, se logra desprender que es información reservada, aquella que pueda revelar las normas, procedimientos, métodos, fuentes, técnicas, sistemas, tecnología, útiles a la generación de inteligencia para la seguridad pública o el combate a la delincuencia, que pueda potenciar o amenazar la seguridad pública o las instituciones del Estado de México, la que sea producto de un intervención de comunicaciones privadas, o bien, la contenida en las averiguaciones previas, carpetas de investigación de los delitos y faltas administrativas.
2. En ese contexto, el Pleno de este Instituto sostiene que entregar información de elementos operativos (policías municipales), también revelaría el estado de fuerza con el que cuenta el Municipio para atender las cuestiones de seguridad pública.
3. En ese sentido, el artículo 142 y 143 de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece la organización jerárquica de las Instituciones Policiales de la Entidad Federativa y sus Municipios, la cual es la siguiente:
4. Comisarios:
5. Comisario General;
6. Comisario Jefe, y
7. Comisario.
8. Inspectores:
9. Inspector General;
10. Inspector Jefe, y
11. Inspector.
12. Oficiales:
13. Subinspector;
14. Oficial, y
15. Suboficial.
16. Escala Básica:
17. Policía Primero;
18. Policía Segundo;
19. Policía Tercero, y
20. Policía.
21. En ese contexto, se puede vislumbrar que proporcionar el cargo de los elementos operativos, daría cuenta del estado de fuerza de la denominada **Guardia Civil Tecámac**. Se afirma lo anterior, en virtud de que como ha quedado demostrado existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona.

1. En ese sentido, el **SUJETO OBLIGADO** deberá dar observancia al Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establece que, para actualizar la causal de reserva aludida, se deberá **acreditar el vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud**, **por medio de la especificación del bien jurídico que será afectado, así como, el potencial del daño o riesgo que causaría.**
2. Sobre lo anterior, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad de los habitantes del Estado de México, es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, por lo que, omitir proporcionar la información solicitada, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realizan las autoridades para garantizar la seguridad dentro del territorio del Estado de México, en sus diferentes vertientes, toda vez que, proporcionar lo peticionado por cuanto hace al personal de seguridad pública, permite que los empleados de gobierno adscritos a los cuerpos policiacos sean identificados o identificables, circunstancia que puede poner en riesgo la vida e integridad física de los integrantes de los cuerpos de seguridad, sus familias y allegados.
3. En ese contexto, cabe hacer mención lo establecido en el artículo 81, fracción III, de la Ley de Seguridad del Estado de México:

*“****Artículo 81.-******Toda*** *información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables.* ***No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada*** *en los casos siguientes:*

*…*

***III.******La relativa a servidores públicos miembros de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida e integridad física con motivo de sus funciones;****”*

1. Sirve de orientador el Criterio de interpretación, con número de registro SO/006/2009, de la Segunda Época, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos**,** el cual refiere:

***“Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información reservada.*** *De conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en* ***el artículo 13, fracción I de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública****. En este orden de ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación,* ***por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública****, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes” (Sic)*

1. En efecto, con base en lo expuesto por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desde el dos mil nueve, se había precisado que la manera de evitar que se hagan identificables a los policías, quienes al realizar funciones operativas, en el contexto nacional en donde la violencia se ha recrudecido y el Estado Mexicano ha redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad pública.
2. Así las cosas, el derecho de acceso a la información encuentra límites en el propio texto constitucional y que, en razón de ello, debe existir una armonización congruente con ese derecho fundamental con los principios rectores de la función del Sujeto Obligado, lo que encuentra sustento en las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del literal siguiente:

***“DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.*** *El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.”*

***“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.****El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.”*

1. Así y de acuerdo con lo expuesto, la limitación para acceder a información de policías o personal con funciones operativas es proporcional y adecuada, respecto del bien jurídico tutelado y, ordenar la entrega de los documentos en donde se elimine su información en la elaboración de versiones públicas; o como es del caso concreto la clasificación del pronunciamiento, se protege la vida, salud o seguridad de los elementos operativos encargados del combate a los delincuentes y prevención de los delitos. Con base en lo anterior, es posible advertir que existen elementos suficientes para que se clasifique cualquier pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo en virtud que se desconoce el cargo de la persona adscrita a la Guardia Civil de Tecámac, a través de la aplicación de la prueba de daño.
2. Luego entonces, el Sujeto Obligado deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño establecida en el artículo 129 de dicho ordenamiento, que se debe justificar de la siguiente manera:
3. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.
4. El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda.
5. Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
6. Así, las decisiones gubernamentales y el cumplimiento de los procedimientos legales, estará garantizando que los ciudadanos tengan el derecho de conocer la información relacionada con la administración pública, excepto en casos muy específicos (seguridad nacional, etc.), por lo que documentos definitivos no suelen entrar en esas excepciones.
7. Asimismo, respecto al plazo de reserva, el artículo 125 de la Ley de la materia, establece que la información clasificada como reservada según el artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. Por otra parte, señala que los documentos reservados serán desclasificados cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo establecido, exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o bien el Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación o se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
8. Asimismo señalar que los documentos reservados serán desclasificados cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo establecido, exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o bien el Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación o se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
9. Sobre el particular, se considera que el **SUJETO OBLIGADO** deberá establecer el plazo de reserva de la información, el cual no podrá exceder de cinco años, a partir de la emisión del Acta del Comité de Transparencia.
10. En ese sentido, los artículos 122, 128 y 130 de la Ley de la materia, prevén que **la clasificación** es el proceso mediante el cual el **SUJETO OBLIGADO** determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Además, que dichos entes deberán aplicar de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información, por lo que, tendrán que acreditar la procedencia.
11. Así, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión; por lo que deberá motivar la confirmación de dicha situación, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que en el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.
12. Por lo expuesto, se considera que el Ayuntamiento de Tecámac, para atender el requerimiento de información, deberá entregar el acuerdo de clasificación emitido por el Comité de Transparencia, en donde de manera fundada y motivada, a través de una prueba de daño, confirme la clasificación como reservada, en términos del artículo 140, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, del pronunciamiento afirmativo y negativo respecto de lo solicitado tocante a la persona señalada en la solicitud de información de mérito.
13. Finalmente no pasa desapercibido que en texto de inconformidad, se advierten manifestaciones de probables delitos a decir del particular, lo que corresponden a manifestaciones subjetivas. Al respecto, es de señalar que corresponden aquellas percepciones, emociones, sensaciones o experiencias internas que una persona puede describir, pero que no son directamente observables o medibles por otras personas. De modo tal que corresponden a manifestaciones que no son atendibles vía derecho de acceso a la información pública, por lo que se dejan a salvo sus derechos para interponer las quejas o denuncias que a sus intereses convenga ante las autoridades competentes.
14. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO**. Resultan infundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer en el Recurso de Revisión **00253/INFOEM/IP/RR/2024**,en términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Tecámac** y se **ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, la siguiente información:

1. **Acuerdo de Clasificación emitido por el Comité de Transparencia, en donde de manera fundada y motivada, a través de una prueba de daño, confirme la clasificación como reservada, en términos del artículo 140, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, del pronunciamiento afirmativo y negativo respecto de lo solicitado en la solicitud de información 00007/TECAMAC/IP/2024.**

**TERCERO. Notifíquese** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente Resolución.

**QUINTO.** Notifíquese a **EL RECURRENTE** la presente Resolución, vía SAIMEX.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnar vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; o bien, a través del juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR MAYORÍA DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO DISIDENTE; EN LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.